

Expediente: **2308/24**

Carátula: **CABRERA MIGUEL ANTONIO C/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ PROCESOS DE CONSUMO**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 4**

Tipo Actuación: **FONDO CON FD**

Fecha Depósito: **10/12/2025 - 00:00**

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

27379583089 - CABRERA, MIGUEL ANTONIO-ACTOR/A

27380631925 - PIAZZA S.A., -DEMANDADO/A

20138472273 - SEGUROS BERNANDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, -DEMANDADO/A

90000000000 - JORRAT, JOSE AGUSTIN-PERITO

20235175801 - FCA S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, -DEMANDADO/A

1

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Juzgado en lo Civil y Comercial Comú de la XVI Nominación

Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 4

ACTUACIONES N°: 2308/24



H102345890896

Autos: CABRERA MIGUEL ANTONIO c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ PROCESOS DE CONSUMO

Expte: 2308/24. Fecha Inicio: 10/05/2024.

San Miguel de Tucumán, 09 de diciembre de 2025.

Y VISTOS: los autos "CABRERA MIGUEL ANTONIO c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ PROCESOS DE CONSUMO", que vienen a despacho para resolver, de los que

RESULTA:

I) El 28 de agosto de 2024 se presentó la letrada Georgina Antonella Hasssan, en carácter de apoderada del Sr. Miguel Antonio Cabrera, DNI N°22.652.619, e interpuso demanda en contra de: i) Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., CUIT N°30500050310, con domicilio en 9 de julio 745 de esta ciudad; ii) FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados (en adelante, FCA S.A.), CUIT N°30692239055, con domicilio en calle Carlos María Della Paolera 299, piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y iii) PIAZZA S.A., CUIT N°30691752751, con domicilio en calle San Martín 1172 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El actor reclama: i) La entrega de la información de todos los pagos realizados de la prenda y seguro del vehículo dominio AB706CL, y los contratos respectivos (Seguro y Prenda); ii) El levantamiento de la prenda registral suscripta sobre el mencionado automóvil; iii) Ordenar a Seguros Bernardino Rivadavia el pago del monto correspondiente de indemnización por destrucción total en la suma de \$4.851.000 más la cláusula de ajuste del 40% por el aumento del valor del vehículo; iv) Resarcimiento en concepto de daño moral por la suma de \$2.000.000 por abuso de derecho, posición dominante y trato vejatorio; v) Aplicación de daños punitivos a las demandadas.

Entiende que el presente pleito tiene su eje en la falta de información cierta, clara y detallada a su mandante y al intento de cobro de intereses por la parte demandada sobre un monto en dinero que no está claro si debe abonarse debido a la vigencia de la medida cautelar dictada en la causa "Defensor del Pueblo de Tucumán c/Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y Otros s/Sumarísimo (Residual)", Expte. N°2702/19. Agrega que la presente acción también está motivada por la violación de la parte demandada de un elemento esencial del contrato de prenda como lo es el plazo, intentando alargar "*sine die*" el mismo (art. 11, Dto. Ley N°15348/46).

Comenta que su mandante adquirió un plan de ahorro para hacerse del vehículo marca Fiat Attractive, dominio AB706CL, en la concesionaria PIAZZA S.A., donde se vendían los planes de ahorro de la codemandada FCA S.A. Indica que dicho automotor fue entregado el 12/07/2017, luego de ser adjudicado por licitación. Aclara que, al momento de la entrega, la concesionaria "*obligaba a su mandante a sacar el seguro del vehículo por estar prendado*" con la codemandada Seguros Bernardino Rivadavia. De tal modo, concluye, está perfeccionada la conexidad contractual entre todos los codemandados en el presente negocio jurídico.

Precisa que el Sr. Cabrera fue integrante del grupo 13393, orden N°119, Plan 84, en el marco del mencionado plan de ahorro y, como tal, abonó las 84 cuotas correspondientes al mismo. Por ello, requiere el levantamiento de la prenda registrada sobre el vehículo adjudicado. Manifiesta que esto fue solicitado en numerosas oportunidades sin éxito alguno. Agrega que las demandadas no entregaron el contrato de adhesión de ahorro previo ni el de seguro a su mandante. Resalta que, el 10/05/2024, su poderdante realizó una denuncia en la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, fijándose una audiencia en donde las demandadas no informaron en forma clara y detallada el estado del plan de ahorro ni levantaron la prenda del vehículo de su mandante, como tampoco ofrecieron el pago del seguro por destrucción total de aquél.

Entiende que al haber su mandante abonado todas las cuotas correspondientes al plan de ahorro, no corresponde destinar el dinero del seguro por destrucción total para cubrir una obligación de prenda inexistente, por encontrarse la misma vencida y totalmente abonada. De este modo, argumenta que resulta abusivo e ilegal la postura de las demandadas de mantener sin plazo la prenda sobre el vehículo de su mandante; como también resulta ilegal y abusivo destinar el dinero del seguro por destrucción a una prenda que se encuentra cancelada.

Además, precisa que la mencionada compañía de seguros intenta defraudar a su mandante, cuando el contrato de seguro se suscribió entre el Sr. Cabrera (asegurado) y la mencionada firma de seguros, y no con la Administradora del Plan de Ahorro. Reitera que estos hechos evidencian una conducta abusiva, cuasi delictiva, por parte de las demandadas en tanto no tienen intención de cumplir los respectivos contratos de prenda y de seguro.

Finalmente, cita Derecho, solicita la aplicación del beneficio de justicia gratuita a su mandante y acompaña prueba con su presentación.

II) El 26 de agosto de 2024 se tuvo por apersonada a la parte actora y se le otorgó el beneficio de justicia gratuita. Además, se corrió traslado de la demanda a las accionadas, fijándose fecha de audiencia en los términos de los art. 467, 468 y cctes. del CPCCT.

III) El 28 de octubre de 2024 se apersonó el abogado Mario Alberto Martín F. Zuviría, en carácter de apoderado de la firma Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., y contestó demanda oportunamente.

Luego negar de manera general y particular todas y cada una de las afirmaciones realizadas por el actor en su demanda, siempre que no sean reconocidas expresamente, se propone a narrar su versión de los hechos.

Afirma que es cierto que a la fecha del siniestro (03/10/23), el automóvil marca y modelo Fiat Palio 1.4 P Attractive L/14, dominio AB706CL, tenía contratada la póliza de seguro n°50/02/774826/000, que cubre, entre otros riesgos, la destrucción total del automotor asegurado. Indica que también resulta cierto que la garantía otorgada quedó condicionada a que se demuestre no sólo la existencia del siniestro sino también el cumplimiento con las condiciones generales y particulares de la póliza contratada y la ley de seguros.

A su vez, se ocupa de distinguir entre los contratos aludidos por el actor en su demanda, precisando que el contrato de plan de ahorro en torno al cual gira el reclamo por el levantamiento de la prenda resulta un negocio jurídico completamente ajeno a su mandante; quien además niega, por no constarle sus términos y condiciones contractuales, es decir, su alcance y contenido. Así, entiende que resultan ajenos a su mandante todos los reclamos formulados al respecto, no teniendo responsabilidad alguna por los mismos (art. 40, Ley 24.240).

Destaca que el contrato de seguro que vincula a su mandante con el actor tiene como suma asegurada el monto de \$4.851.000. No obstante, aclara que la aludida póliza consigna la existencia de un acreedor prendario sobre el vehículo asegurado (individualizado como FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS), y dado lo establecido por la cláusula contractual *CA-CC 7.1 - Transferencia de Derechos a Acreedores Prendarios*, en caso de siniestro por daño total, debe estarse entonces a lo establecido en dicha póliza, que dispone “En razón que el Asegurador ha sido notificado de la constitución de prenda con registro a favor del acreedor indicado en el Frente de Póliza con relación a los bienes asegurados por la presente póliza, se deja establecido que con la conformidad del asegurado, al presente seguro queda sujeto a partir de la fecha establecida en el Frente de Póliza a las siguientes condiciones: I.- El Asegurado transfiere al acreedor indicado precedentemente sus derechos al cobro de la indemnización que corresponda en caso de siniestro que afecte a dichos bienes, en la medida del interés emergente de su crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley N° 17418”.

Comenta que el Sr. Cabrera denunció la ocurrencia de un siniestro y que su vehículo asegurado resultó con diferentes daños materiales. Así, tras su inspección, se determinó la existencia de daño total (cláusula *CG-DA 4.2 - Daño Total*). Indica que, al tratarse de un riesgo amparado por la póliza contratada, se dio curso al proceso de liquidación del siniestro; se notificó la suma a indemnizar y se requirió la documentación a cuyo cumplimiento por parte del asegurado quedaba supeditado el pago de la indemnización correspondiente (cláusula *CG.CO 3.1*).

Informa que uno de los documentos que debía ser presentado era el “*Certificado de Deuda emitido por el Acreedor Prendario*”, para con ello poder efectuar la liquidación y abonar la indemnización de manera correcta, en las porciones que a cada uno le corresponde, es decir: al acreedor, si correspondiere, por la deuda pendiente, y el remanente a favor del asegurado, teniendo como límite

de la prestación debida la suma asegurada.

Dice que, una vez examinada la documentación pertinente, se pudo constatar que el asegurado registraba al día 04/07/2024 una deuda con Fiat Plan que ascendía a la suma de \$3.320.139,64. Por ello, su mandante niega y desconoce que el Sr. Cabrera haya cancelado el saldo deudor aludido, y consecuentemente, que resulte procedente el levantamiento de la prenda. Por igual razón niega que la indemnización derivada de la destrucción del automóvil siniestrado deba ser abonada en su totalidad al actor. Entiende que Seguros Rivadavia se encuentra obligada a indemnizar prioritariamente al Acreedor Prendario, por imperio de lo establecido en la referida cláusula contractual (CA-CC 7.1 - Transferencia de Derechos a Acreedores Prendarios).

Destaca que su mandante dio oportuno trámite al siniestro, aguardando el cumplimiento de aquellas cargas impuestas al asegurado, para recién hacer efectivo el pago y liquidación. Sostiene que el actor debía presentar y hacer entrega de la documentación mencionada en la cláusula contractual CG-CO 3.1. y su anexo, como condición previa sine qua non para que recién resultase exigible el pago de la indemnización. De allí que en el presente caso y en lo que respecta a su mandante, resulta infundada e improcedente la pretensión de cobro contenida en la demanda, en tanto: i) el actor carece de derecho para reclamar el cobro del total de la indemnización, por cuanto registra deuda prendaria ante el Acreedor. ii) El pago de la indemnización no podría exigirse dado el incumplimiento de las cargas que pesan sobre el propio asegurado. (Cláusula CG-CO 3.1.).

Aduce que, una vez que el asegurado presente la totalidad de la documentación requerida, el monto a liquidar por el siniestro no podría extenderse más allá del límite fijado en la póliza como medida para la indemnización por Daño Total, calculada conforme procedimiento previsto en el contrato, toda vez que la suma asegurada constituye el límite a la prestación debida (obligación a cargo de la aseguradora). Argumenta que, al emitir la póliza, la aseguradora se comprometió al pago de una suma de dinero equivalente al valor de venta al público de contado en plaza de un vehículo similar al asegurado, a la fecha de ocurrencia del siniestro, con el límite de cobertura previsto

Entiende que el monto a indemnizar equivale al valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro (Cláusula CA-CC 04.2). Añade que la cláusula de ajuste de un 40% sólo resultaría de aplicación en la hipótesis de que el valor a riesgo existente al momento del siniestro fuera superior a la suma asegurada fijada en la póliza, y en la medida de dicha diferencia, pero ello no implica elevar automáticamente las sumas aseguradas en un 40% como lo pretende el accionante, ya que podría, en el caso, no resultar de aplicación o ser de aplicación en un porcentaje menor, en la medida que el valor venal al momento del siniestro fuese superior a la suma asegurada.

Rechaza los rubros reclamados por el actor en concepto de daño moral y daños punitivos, negando que su mandante haya incurrido en una conducta dolosa, vejatoria, estigmatizante y/o de mala fe en relación con el contrato de seguro que lo vincula con la parte actora. Sostiene que no ha existido de parte de Seguros Rivadavia ningún tipo de incumplimiento, y mucho menos una conducta maliciosa y dañosa, quien actuó ajustado a derecho, a las reglas del contrato y a la normativa propia de la actividad. En ningún momento obró de mala fe. Tramitó oportunamente el siniestro, pero el mismo no pudo ser pagado dado el incumplimiento del asegurado con las cargas a él impuestas.

Finalmente, cita Derecho, jurisprudencia y ofrece prueba con su presentación.

IV) El 28 de octubre de 2024 se presentó la abogada Sofia Medici, en carácter de apoderada de PIAZZA S.A., y contestó demanda oportunamente.

Luego de negar de manera general y particular todos y cada uno de los hechos invocados por el actor, se dispuso a narrar su verdad de los hechos.

Comenta que el actor suscribió un plan de ahorro con la firma FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados en el mes de abril de 2017 y le fue adjudicado el vehículo FIAT Palio Attractive 1.4, en agosto del mismo año.

Indica que, conforme vector de pagos emitidos por la Administradora, al 28/10/24 el actor posee 77 cuotas pagadas y 7 cuotas licitadas. A su vez, precisa que, al analizar el estado de deuda, se verificó que el Sr. Cabrera adeuda, a la misma fecha, la suma de \$8.891.538,38 correspondiente a cuotas impagas históricas, actualización por pago fuera de término, Impuesto Ley 25.413 y “diferimientos”, que surgieron como consecuencia de una medida cautelar concedida en los autos “DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ SUMARISIMO (RESIDUAL)” – Expte. N°2702/19-I2.

Destaca que dicha medida consiste en que la Administradora debe cobrar sólo el 80% de las cuotas a los ahorristas, y luego la diferencia por la suma adeudada se difiere en más cuotas al finalizar el plan de ahorro, es decir, al llegar a la cuota 84, ese saldo se actualiza en base al valor móvil de la unidad. Sostiene que su mandante no tiene injerencia ni facultades para determinar cuánto es el saldo, toda vez que PIAZZA S.A. no administra planes de ahorro, ni percibe las cuotas de los ahorristas. Deberá ser FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados quien explique cómo se actualizaron dichos diferimientos ordenados mediante la sentencia de medida cautelar. Por lo tanto, afirma, hasta que la titular del plan de ahorro no cancele la deuda de la totalidad de las sumas diferidas, la Administradora no se encuentra obligada a levantar la garantía prendaria, tal como se encuentra previsto por la referida resolución y en la sentencia n° 472 (Expte. N°2702/19-I2) de fecha 04/09/2019.

Menciona que el actor presentó su demanda alegando que abonaba todos los meses las cuotas mediante los cupones de pago (en los cuales existe un ítem llamado “Cumplimiento Cautelar”), indicando falazmente que las demandadas incurrieron en incumplimiento al deber de información al no haberle solicitado instrucciones específicas a cada deudor. Argumenta que es claro que el modo en que se actualizarán los remanentes de cada cuota será idéntico forma a lo que establece el contrato, es decir al “valor móvil”, previsto en el art. 4 de las condiciones generales de contratación.

Agrega que PIAZZA S.A. es Concesionaria Oficial de FCA Automóviles Argentina S.A., y como tal no percibe el valor de las cuotas que abonan los adherentes, ni tiene facultades para establecer el valor móvil ni de qué forma se van a actualizar remanentes. Así, afirma que su mandante no tiene injerencia alguna en el reclamo del actor en tanto existe una imposibilidad material y contractual de modificar la deuda que posee el Sr. Cabrera con FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.

Por otro lado, sostiene que la Administradora es la acreedora prendaria privilegiada y quien percibirá en primer término la indemnización, en el caso que abone Seguros Rivadavia. Destaca que, si dicha suma cubre la totalidad de la deuda y existe un remanente, se pagará dicha diferencia al ahorrista. Comenta que diferente es el caso en el cual la indemnización no alcance a cubrir la deuda del ahorrista, esta deberá ser abonada por el titular del plan a la Administradora a los fines de liberarlo de la garantía prendaria.

Aclara que su mandante desconoce los motivos por los cuales Seguros Rivadavia no brindó cobertura al Sr. Cabrera, y deberá la aseguradora dar sus motivos al contestar demanda.

Rechaza lo rubros reclamados por el actor en concepto de daño moral y daños punitivos al entender que es el mismo quien adeuda a la Administradora del Plan la suma de \$8.891.538,38 por los saldos

pendientes de cuota. Indica que el actor estuvo informado en todas y cada una de las cuotas acerca de los descuentos realizados por la referida medida cautelar, y siempre estuvo en sus posibilidades solicitar la exclusión de la misma, sin embargo, no lo hizo, el actor prefirió continuar beneficiándose de dichos descuentos y pagar el 80% de cada cuota.

Finalmente, cita Derecho y ofrece prueba con su presentación.

V) EL 5 de diciembre de 2024 se apersonó el letrado José García Pinto, en carácter de apoderado de FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, y contestó demanda solicitando su rechazo con costas, y negando de manera general y particular todos y cada uno de los hechos y documentos expuestos por la demandante que no sean expresamente por él reconocidos.

Precisa que: i) Su mandante se vio obligada a aplicar una medida cautelar en favor de la parte actora por manda judicial y la actora reconoció su conocimiento; ii) El carácter provisional del dictado de una medida cautelar implica que, para la liberación de prenda sobre una unidad adquirida a través de un plan de ahorro previo, se deben abonar las sumas no cobradas por aplicación de dicha medida; iii) En virtud de la existencia de un estado de deuda en el marco de la contratación del actor, el eventual pago por parte de la aseguradora del automotor debe ser realizada a su mandante. A todo evento, no es responsable por la falta de pago de la aseguradora.

Comenta que celebró con la parte actora un contrato de ahorro previo el 19/04/2017, identificado con el grupo 13393 y orden 119. Contratación gestionada por el concesionario PIAZZA S.A. por el modelo FIAT Palio Attractive 5P 1.4.

Detalla que la parte actora resultó adjudicataria por licitación en la adjudicación dada de alta el 13/06/17. Indica que la oferta se realizó por \$50.000 y aplica de la siguiente manera: i) Gastos de sellado de cuota 5 a cuota 12 \$2.210,96, ii) Derecho de inscripción de cuota 5 a cuota 12 \$5.677,44; iii) Alícuotas de cuota 78 a cuota 84 \$23.275, iv) Diferimientos/Recupero alícuotas de cuota 19 a cuota 84 \$18.620,58; v) Excedente de licitación en cuota agosto 17 por \$216,02.

Manifiesta que el 06/07/2017 ingresó un pedido de unidad por el modelo ahorrado y el 17/08/2017 la parte actora retiró su unidad solicitada (chasis N°4206694). Aclara que se abonaron 73 cuotas en término, 4 fuera de plazo y 7 fueron cubiertas con lo abonado en concepto de licitación. Sin embargo, dicho plan fue alcanzado por la mencionada medida cautelar, la cual se aplicó desde el 08/01/2020. Por lo tanto, sostiene que al 03/12/2024, el plan tiene un estado de deuda de \$9.117.213,23.

Entiende que la medida cautelar que dispuso la suspensión de cierto pago de sumas devengadas en el marco del plan de la parte actora no implicó condonación de deuda alguna. Así, para dar por cancelado el plan del actor, dado que el proceso colectivo mencionado no tuvo resolución definitiva a la fecha, resultará necesaria la cancelación de la suma de deuda que se devengó pero que no ha resultado exigible por motivo de dicha medida cautelar.

Relata que, de los avisos remitidos al actor, surge el concepto "Cumplimiento Cautelar" en referencia expresa a su aplicación y que aquél tenía conocimiento del concepto que se le estaba descontando. Desconoce las razones por las cuales el actor habría indicado que no se le proporcionó información cierta, clara y detallada en el marco de su contratación con esta sociedad. Agrega que la parte actora no acreditó comunicación alguna con su mandante al respecto y que la misma no cuestionó de forma alguna la variación de cuotas en el marco de su contrato de ahorro previo, por lo que tampoco podría alegar el desconocimiento de la necesaria actualización de las sumas no abonadas gracias a la aplicación de la medida cautelar en su favor.

Argumenta que el eventual pago de indemnización por destrucción total de la unidad lo realiza la aseguradora a esta parte cuando existe una prenda sobre dicha unidad, por lo que no hay responsabilidad de su mandante por el pago del este. Entiende que, tal como surge del título automotor acompañado por el propio actor, su mandante es acreedor prendario de la parte actora y lo cierto es que, si es ella indemnizada, la compañía aseguradora deberá en primer lugar cancelar la deuda con FCA S.A. y luego, de existir excedente, se reintegrará a la parte actora.

Destaca que la garantía prendaria se mantiene, no para beneficio de esta sociedad, sino del grupo de ahorristas que ha sido agrupado con la aquí parte actora. Desarrolla que, si la parte actora cesa en el pago de sus obligaciones, los perjudicados directos en el cese de esos pagos son los demás ahorristas que han sido agrupados por ella. En tal caso, esta sociedad no percibiría los fondos suficientes para adjudicar vehículos o, finalizado el grupo, reintegrar el 100% de lo correspondiente a los ahorristas que decidieron no retirar un vehículo 0km. Por tal motivo, para evitar que los ahorristas adjudicatarios cesen en el pago de sus cuotas, por haber adquirido el vehículo, se grava dicho bien con una garantía prendaria.

Comenta que la parte actora no mencionó circunstancias que sirvan a los presupuestos mínimos e indispensables para la aplicación de las normas de defensa del consumidor. Entiende que en nuestro ordenamiento no existe una presunción respecto al carácter de consumidor, por lo que es necesario alegar y probar el mismo.

Rechaza la aplicación de daño moral y daños punitivos perseguido por la parte actora, precisando que el actor basa el daño moral en una situación de malestar vagamente descrita, lo cual no es suficiente para considerarlo acreditado, ni ha ofrecido probar dicho supuesto daño. Más aún, ha señalado un supuesto aprovechamiento en su contra y cierta falta de información cuando ello no surge de lo relatado en su demanda y en esta presentación.

Finalmente, cita Derecho y ofrece prueba junto a su presentación.

VI) El 12 de diciembre de 2024 tuvo lugar la Audiencia de Conciliación y Proveído de Pruebas donde, al no existir posibilidad de conciliar entre las partes, se tuvo por contestada la demanda por las accionadas y se procedió a proveer las pruebas ofrecidas formándose los siguientes cuadernos: Pruebas del actor. A1 – Documental – Informativa: Documental admitida. Informativa desestimada. A2 - Exhibición de documentación: Pendiente de proveer. Pruebas de FCA S.A. D1. Documental – Documental en Poder de Terceros: Ambas admitidas. D2. Exhibición de documentación: No se libra oficio debido a que la documentación requerida fue acompañada. D3. Informativa: Admite en cuanto derecho hubiere lugar. D4. Pericial contable: Se admite en cuanto derecho hubiere lugar y se acumula a este cuaderno el B2. Pruebas de PIAZZA S.A. C1. Instrumental: Admite en cuanto derecho hubiere lugar. C2. Exhibición de documentación: Admite. Pruebas de Seguros Bernardino Rivadavia. B1. Documental – Informativa: ambas admitidas. B2. Pericial contable: acumulada a D4. B3. Pericial Caligráfica: Pendiente. Debe impulsarse en caso de desconocimiento de firma de parte del actor.

VII) El 30 de mayo de 2025 se realizó el informe del actuario para dar cuenta de las pruebas producidas, las cuales se agregaron para luego dar vista a la Fiscalía Civil de la 2da. Nominación en los términos del art. 52 de la ley N°24.240.

Así, una vez contestada la vista por el Agente Fiscal, se procedió a practicar planilla fiscal. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025 se ordenó el pase de los presentes autos a despacho para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I) Que la pretensión de la parte actora puede desglosarse en los siguientes puntos: i) Violación al deber de información; ii) Levantamiento de la prenda registral suscripta sobre el vehículo Palio Attractive 5P, dominio AB706CL, al haberse pagado las 84 cuotas correspondientes al plan de ahorro identificado como Grupo 13393, Orden 119, Meses Plan 84; iii) Pago de las sumas determinadas en la liquidación del seguro por destrucción total del vehículo mencionado; iv) Reclamo por daño moral y aplicación de daños punitivos.

Por su parte, lo contestado por las demandadas puede articularse sobre los siguientes aspectos: i) Cumplimiento del deber de información de acuerdo con lo previsto expresamente en las cláusulas del contrato de seguro y en las condiciones generales de contratación; ii) Imposibilidad del levantamiento de la prenda registral ante la existencia de una suma de dinero adeudada por parte del actor por saldos pendientes de cuotas diferidos; iii) La indemnización prioritaria del acreedor prendario (Administradora del Plan) para cobrar la indemnización por liquidación del seguro de acuerdo a lo establecido en la póliza N°50/02/774826/000; iv) Rechazo de la procedencia de los rubros reclamados.

Por lo tanto, a los fines de poder determinar la procedencia de la demanda o su eventual rechazo, corresponde dilucidar las siguientes cuestiones: i) Carácter de la relación que vincula a las partes intervinientes y el marco normativo aplicable; ii) Incumplimiento del deber de información; iii) Existencia de deuda del ahorrista y levantamiento de prenda registral; iv) Liquidación del seguro por destrucción total y acreedor prendario; v) Procedencia del reclamo en concepto de daño moral; vi) Aplicación de daños punitivos.

II) Que, en nuestro sistema jurídico, el llamado estatuto del derecho del consumidor se encuentra configurado principalmente por las normas que surgen de las disposiciones establecidas en la Ley N°24.240 (LDC) y el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN, art. 1092 y ss., y demás cctes.), además, claro está, de lo enunciado por el art. 42 de la Constitución Nacional. Ello exige que, ante la mera constatación de elementos aportados al proceso que permitan admitir la configuración de una relación de consumo - aun cuando las partes no la hayan invocado -, el magistrado interviniente debe acudir al sistema protectorio y aplicar sus disposiciones. "De este modo, tratándose de un régimen legal de orden público (arts. 36 y 65, LDC) y establecido en cumplimiento de un principio protectorio de jerarquía constitucional (art. 42, CN), su aplicación resulta imperativa para el juez de la causa que está, por tanto, impuesto del deber de asumir un rol proactivo en el proceso que pueda eventualmente comprometer los derechos de un consumidor (Japaze, B. *“Relación de consumo y calificación del consumidor inmobiliario”*, Derecho de Consumo Inmobiliario, La Ley, 2021, Tomo I, p. 61). Ante ello, corresponde determinar si los rasgos que presenta la relación que vincula a las partes intervinientes en el presente caso puede categorizarse como una relación de consumo en los términos invocados.

El art. 1092 del CCCN (en el mismo sentido de lo enunciado por el art. 3 de la LDC) dispone que una relación consumo tiene lugar, básicamente, cuando el vínculo jurídico se da entre un proveedor y un consumidor o usuario. De esto se sigue que la extensión y el alcance de esta relación estará dada por los términos que la ley asigne a los elementos que la componen, es decir, sujetos, objetos y fuentes. El art. 1 de la LDC considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. La norma también equipara el carácter de consumidor a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su

grupo familiar o social. Por su parte, el art. 2 de la LDC define como proveedores a todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. De lo dicho, podemos extraer la siguiente regla: De la vinculación de un proveedor de bienes o servicios con un consumidor - o uno equiparado a tal - se sigue la existencia de una relación de consumo.

En el presente caso, el contrato que vincula a las partes integra lo que se ha llamado un sistema de ahorro previo para fines determinados. Este incluye diversos contratos que resultan conexos entre sí por una causa o finalidad supracontractual común, como la de colocar un automóvil en el mercado. En él podemos encontrar, por ejemplo, “los contratos de suministro que celebra la administradora con la proveedora de bienes a adjudicar -fabricante o importadora-; los contratos de seguro con la empresa aseguradora de los bienes adjudicados y de vida del suscriptor; los contratos de concesión con la intermediaria – concesionaria –, y el contrato de ahorro previo con fines determinados entre la administradora y los ahorristas o adherentes que conforman el grupo cerrado” (Arias M., *“Los sistemas de ahorro previo para la adquisición de automotores, el consumidor ahorrista y la emergencia económica”*, p. 1 – 2, La Ley, AR/DOC/2397/2020).

En concreto, el contrato de plan de ahorro comprende “un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas contra la entrega de un bien mueble o inmueble, un servicio o una suma de dinero, la que tendrá lugar en el futuro una vez que cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o licitación. Este contrato de ahorro produce sus ventajas si se encuentra enlazado a un grupo amplio, que permita reunir una masa de dinero relevante, conforme a las relaciones técnico-financieras que determina la organizadora” (Lorenzetti R., *“Tratado de los Contratos: parte especial”*, T. I, p. 735., 1ª ed., Rubinzal - Culzoni, 2021). Además, se trata de una actividad sometida al control estatal, conforme lo establece el decreto 142.277/43, con sus modificaciones y la regulación administrativa que es su consecuencia (por ejemplo, la mencionada Resolución 8/15 de la Inspección General de Justicia), lo cual implica la aprobación de la ecuación económica del plan, del sistema de cálculo de la cuota y del contrato celebrado por adhesión a cláusulas predispuestas por el que se instrumenta, así como toda la norma administrativa posterior, especialmente en materia de diferimiento de cuotas sucesivos decididos por la autoridad de aplicación.

Al respecto, se encuentra ampliamente aceptado que el contrato de ahorro para fines determinados es un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la Ley N°24.240 (Wajntraub, J., *“Contrato de ahorro previo, en: Defensa del Consumidor”*, Buenos Aires, Depalma, 1998, p. 264). Lo afirmado coincide con la idea receptada en la jurisprudencia de nuestro país, al indicarse que “los suscriptores de los contratos de planes de ahorro previo como el descrito, cuya finalidad es permitir la adquisición de cosas para uso o consumo del adquirente o de su grupo familiar o social, son consumidores en los términos del art. 1 de la ley 24.240” (CCCom. Sala C, “Fasán, Alejandro Luis Arnoldo c/Wolkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados”, 26/04/2011, AR/JUR/21761/2011). Es que, por un lado, el suscriptor de un plan de ahorro previo que pretende la adquisición de un automotor como destinatario final, reviste la calidad de consumidor en los términos de los arts. 1° de la LDC y 1.092 del CCyCN. Por su parte, el fabricante, la sociedad administradora y el sujeto comerciante revisten el carácter de proveedores, toda vez que cumplen con los requisitos previstos en los arts. 2° de la LDC y 1.092 del CCyCN, en cuanto se trata de personas jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollan de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, importación, concesión, marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los consumidores.

No debe olvidarse que, si bien como principio la vinculación contractual aparece trabada entre la codemandada FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y el Sr. Cabrera, es decir, entre la Administradora y el ahorrista, el sistema de ahorro previo también está integrado “por la fábrica automotriz, la aseguradora con la cual se contrata el seguro de vida colectivo de saldo deudor para el supuesto de fallecimiento del ahorrista, y cuando el ahorrista es adjudicatario, también integra la conexidad contractual la aseguradora cuyo riesgo asegurable recae sobre los siniestros ocasionados con el bien tipo adjudicado, por lo tanto, todas esas empresas son proveedores de la relación de consumo cuando el ahorrista es un consumidor según los establecido por los arts. 1 LDC y 1092 CCyCN” (González Vila, *“La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor”*, 2021). En el caso, esto surge evidente de la documentación incorporada, la cual demuestra la vinculación funcional entre las sociedades codemandadas en la integración de los sucesivos eslabones de la cadena de fabricación y comercialización del automóvil objeto del contrato, sumada, claro está, la vinculación con la firma aseguradora.

En este sentido y compartiendo lo dicho por la Excma. Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial Concepción, se trata de una “modalidad de contrato con cláusulas predispuestas, en las que la accionante contratante adhirió aceptando en ‘bloque las cláusulas’ proponentes en la oferta del administrador del plan, y sin posibilidad negocial que lo modifique o contradiga. O lo toma o lo deja el contrato en las condiciones ofertadas Consecuentemente, se comparte lo expuesto por el recurrente en el sentido de que nos encontramos frente a un contrato de consumo (arts. 1 y 2 LDC y 1092, 1093, 1094 y 1095 y c. del CCCN), en tanto se advierte de la confrontación producida, indubitadamente las características propias y determinantes de la relación de consumo en la que aquí se ventila y la calidad de consumidores de los accionantes/suscriptores de los planes, desde que ha habido una operación comercial conectiva de las partes, a través de una red de comercialización, cuya operatoria ubica inexorablemente en las posiciones consumidor-proveedor postuladas por el instituto aplicable, a las partes intervinientes. Por ello, cabe estar al principio de protección al consumidor, en caso de duda sobre la interpretación debe estarse a la que sea más favorable al consumidor” (CCCom. - Sala única, Centro Judicial Concepción, Sent. N°528, 01/11/2021).

Finalmente, ha sido cuestionado por FCA S.A. que la parte actora no acreditó debidamente su carácter de consumidor. Al respecto se ha dicho que la acreditación del vínculo contractual a fin de la protección consumeril en este tipo de negocio jurídico quedaría saldada con la sola presentación del contrato, solicitud de adhesión, cupón de pago de la cuota o cualquier otra documentación pertinente, indicando que la acreditación del bien tipo, objeto del contrato, sería en carácter de destinatario final (González Vila, D., *“La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor”*, 2021). De este modo, si bien la calidad de destinatario final no se presume, en el caso esto no requiere mayor actividad probatoria o argumentativa que la desarrollada en el proceso. En efecto, tanto de la nota de pedido del vehículo generada el 29/06/2017 como del recibo de entrega de unidad del 23/08/2017 por parte de la demandada, surge con claridad el carácter de consumidor final del actor y el destino de uso particular para el vehículo. En este sentido, la protección otorgada por el sistema jurídico a los consumidores o usuarios exige al proveedor de bienes o servicios la carga de la prueba de que el sujeto que los ha adquirido o utilizado, o tenga interés en su adquisición o su uso, no deba ser considerado en cada caso concreto como consumidor o usuario a los fines de la tutela correspondiente; Y, en caso de duda, debe estarse a favor del consumidor (art. 3 LDC). Por lo tanto, no existiendo en la causa prueba alguna que desvirtúe el carácter de consumidor final de la parte actora y considerando particularmente los instrumentos mencionados, se tendrá al Sr. Cabrera como configurado en dicho carácter.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, el presente caso debe valorarse observando las normas que configuran el microsistema protectorio y tuitivo del derecho del consumidor conformado principalmente por las normas que surgen de lo enunciado por el art. 42 de la CN, la de la ley de defensa del consumidor (Ley N°24.240 y sus modificatorias), y el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1092 a 1122).

III) Que un correcto tratamiento de la problemática presentada exige detenerse previamente en la sistemática del ahorro previo para fines determinados, esto en cuanto el contrato que analizamos es una especie dentro del género dentro de dicho sistema. En efecto, desde el punto de vista del consumidor, el contrato se celebra entre dos partes: el administrador (proveedor) y el suscriptor (consumidor). Sin embargo, como centro de interés, la parte organizativa está integrada – como mínimo - por la sociedad administradora, el fabricante y el concesionario (Lorenzetti, R. L., *“Tratado de los contratos”*, T. I., Rubinzal - Culzoni, p. 733). A su vez, ello se inserta en un marco de mayor amplitud conformado por el resto de los integrantes de este sistema vinculados entre sí como los seguros automotores, seguros de vida y los beneficiarios designados, como efecto de la conexidad contractual. De tal manera, el sistema de plan de ahorro se configura como un tipo de contratación compleja que constituye una situación de conexidad contractual entre diferentes contratos, cuya articulación exige una interpretación que valore de manera integrada todos los acuerdos que se incluyen en este particular tipo de negocio jurídico.

En concreto, con el fin de adquirir un automóvil, cada suscriptor se obliga a abonar una suma de dinero en cuotas (durante toda la vida del contrato), mientras que la sociedad administradora asume la obligación de formar y mantener el grupo de ahorro, calcular y cobrar las cuotas (lo que incluye exigir la constitución de garantías y el pago de seguros para asegurar el flujo de fondos), adquirir los bienes, organizar los sorteos y licitaciones para luego adjudicar los bienes a los suscriptores beneficiados (Müller G.E., *“Círculos de ahorro previo...”*, La Ley, 2025, p.23). En la misma línea se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán al afirmar que este tipo de contratos se perfecciona entre la Administradora y el suscriptor, por el cual la primera se obliga a la formación de un grupo cerrado y el suscriptor al pago de una cuota mensual, igual para todos los miembros del grupo, durante un período determinado, con miras a que por sorteo o licitación se le adjudique en propiedad un bien adquirido con el fondo común. "Así, los contratos de ahorro previo refieren al método que organiza a los ahorristas, apoyándose en el aporte mancomunado y el ahorro recíproco. Quienes suscriben el plan se obligan a constituir un capital que se integra mediante entregas periódicas y la contraparte se obliga a administrar ese patrimonio. Se ha especificado también que en esos contratos usualmente se conviene que el reajuste de las cuotas de integración estará en directa relación con el incremento del precio de lista (“valor móvil”) de los bienes cuya adquisición se pretende" (CSJT en “Defensor del Pueblo”, Sent. 725, 14/06/2022).

Por otro lado, el contrato de ahorro previo se enrola entre los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, ya que el ahorrista ingresa al plan con una solicitud unilateralmente redactada por la firma Administradora, a efectos de adquirir un bien automotor nuevo a título oneroso, para su utilización como destino final. Así, la configuración interna del contrato es dispuesta anticipadamente sólo por una de las partes – Administradora -, de modo que, si la otra decide contratar, debe hacerlo sobre la base de lo ya contenido (Condiciones generales de contratación). Por lo tanto, el adherente no participa en la redacción como tampoco influye en su contenido (Müller G.E., *“Círculos de ahorro previo...”*, La Ley, 2025, p. 47).

En este contexto, si bien el ahorrista celebra un único contrato, éste integra un circuito económico que involucra a otras partes distintas, también vinculadas contractualmente dentro de una operación económica global, formando una red contractual en la cual todos están vinculados entre sí por una

finalidad económica común previamente establecida. Por lo tanto, se trata de contratos conexos en los términos de los arts. 1073 y 1074 del CCCN, en cuanto la integración de la red negocial involucra también al concesionario, el fabricante y el seguro, entre otros. De esta forma, los contratos están unidos en un sistema, existiendo una causa-fin o finalidad económica social que trasciende la individualidad de cada contrato, y que constituye la razón de ser de su unión o ligamento. Es que justamente, en el caso del sistema de ahorro previo, ninguno de los contratos que lo componen puede funcionar en forma individual y aislada, y su interpretación debe ser realizada coordinadamente con la operación económica que persiguen.

En este orden de ideas, no caben dudas que el grupo económico integrado por la administradora, el fabricante y la concesionaria, actúa con una finalidad económica común; por lo que de producirse el incumplimiento en ciertas condiciones de una y otra, todas ellas pueden ser demandadas. Es que los negocios involucrados en la operación global -y que vinculan al consumidor con una y otra parte- se encuentran interconectados y ostentan una conexidad relevante que justifica ampliar la legitimación pasiva contemplada en el art. 10 bis de la Ley 24.240. Ese nexo funcional permite la expansión de la responsabilidad, en tanto la concesionaria y la fábrica integran la organización económica obteniendo beneficios.

Ahora bien, en el presente caso no se encuentra controvertida la relación contractual entre el Sr. Cabrera (ahorrista) y la Administradora FCA S.A., como tampoco el vínculo de estas con las codemandadas PIAZZA S.A. (Concesionaria) y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. (Seguro automotor), respectivamente. Las partes están de acuerdo acerca del hecho de que el actor abonó las 84 cuotas que correspondan al plan de ahorro suscripto y que éste retiró el vehículo luego de su adjudicación por licitación. De tal manera, la controversia se enfoca en una instancia avanzada de la relación negocial y consiste en el cumplimiento del deber de información sobre el estado de deuda de la parte actora, el levantamiento de la prenda registral – en caso de corresponder –, y el destino de las sumas que se debería abonar por la liquidación del seguro por destrucción total del vehículo adjudicado al actor.

Lo dicho exige examinar las pruebas producidas, teniendo presente que el proceso no constituye un contexto donde se alcancen verdades absolutas e incontrovertibles, sino que se conforma como un ámbito en el cual, en el mejor de los casos, se obtienen verdades relativas, contextuales, derivadas racionalmente de las pruebas que están a disposición en cada caso (Taruffo, M., *“Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba”*, p. 85). La tarea exige evaluar el material probatorio incorporado de manera conjunta y no aisladamente, por cuanto la certeza no se obtiene con una evaluación puntual de los distintos elementos, sino tomados en su totalidad, de tal modo que unidas eleven al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (Falcón, E., Código Procesal, T. III, p. 190; Peyrano, J., Chiappini, J., *“Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial”*, JA, 1984-III- 799).

El filtro epistemológico estará dado por la relevancia de la información que la prueba aporte sobre los hechos que se juzgan, es decir, si aportan apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y la ciencia. Por lo tanto, se analizarán aquellos elementos que resulten conducentes y posean relevancia para la resolución del presente caso, a saber: i) Denuncia del siniestro N°50/02/133610 del 04/10/2023, ii) Título automotor del vehículo Fiat Palio Attractive, dominio AB706CL, iii) Resumen de estado de deuda (informativo web) Fiat Plan del 20/12/2023, iv) Reporte de vector de pagos Fiat Plan del 03/08/23, v) Certificado de cobertura Seguro de Vehículos Automotores Seguros Rivadavia, vi) Factura - liquidación Fiat Plan del 03/08/23 y comprobante de pago del 17/09/23, vii) Copia de audiencia virtual ante Dirección de Comercio Interior del 10/05/24, viii) Notificación de la liquidación del siniestro y la documentación a presentar por la firma Seguros Rivadavia del 05/01/24, Carta documento del 19/10/23 y del

15/12/23, Póliza de Seguros 50/774823 viii) Vector de pagos del 03/12/24, Solicitud de adhesión del 19/04/2017, nota de pedido del 29/06/2017, recibo de entrega de unidad del 23/08/2017, ix) Informe de cuentas corrientes por comprobante del 25/05/25, Vector de pagos y Estado de deuda detallado de igual fecha, Condiciones generales de contratación, x) Informes periciales solicitados por el demandado FCA S.A. y del codemandado Seguros Bernardino Rivadavia.

IV) Que la parte actora sostiene que no fue debidamente informada del estado de la deuda que se le imputa y que, al mismo tiempo, sirve de motivación a la negativa de la Administradora para levantar la prenda registral suscripta sobre el automóvil adjudicado en el marco de plan de ahorro celebrado; por tal razón denuncia un incumplimiento al deber de información por parte de las demandadas, solicitando que se levante la prenda correspondiente y se resarzan los daños generados.

La demandada FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, coincidiendo con lo manifestado por PIAZZA S.A., argumenta que, si bien la parte actora efectivamente abonó 84 cuotas respectivas al plan acordado, la misma registra una deuda por la suma de \$9.739.213,89, en concepto de cuotas impagas históricas (\$381.061,08), actualización por pago fuera de término (\$27.848,80), diferimientos de pago por recupero cautelar (\$9.251.129,22) e impuesto Ley 25.413 (\$79.174,79). Cabe aclarar que esto coincide con la información extraída del reporte de vector de pagos y del Resumen de Estado de Deuda acompañados por FCA S.A., ambos realizados el al 25/04/25.

La firma Administradora precisa que el efecto de la aplicación de la medida cautelar por la que fue alcanzada el plan de ahorro de la parte actora, es el diferimiento del pago de un porcentaje de la cuota y no una condonación de esta, por lo que su cancelación afectaría directamente al grupo de ahorristas que también conforman el plan, en cuanto la sociedad no percibiría los fondos suficientes para adjudicar vehículos o, finalizado el grupo, reintegrar el 100% a los ahorristas que decidieron no retirar un vehículo 0Km. Además, agrega, la parte actora no acreditó comunicación alguna al respecto, solicitando información, como tampoco cuestionó de forma alguna la variación de cuotas en el desarrollo de su contrato de ahorro previo, sumado a que los avisos o facturas remitidas tenían incorporado el concepto “cumplimiento cautelar”.

Por lo tanto, para un tratamiento adecuado de los extremos planteados, se analizará de manera preliminar el planteo acerca del incumplimiento al deber de información de las firmas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y PIAZZA S.A., para luego considerar el pedido de levantamiento de prenda registral y el pago de la indemnización del seguro por destrucción total del vehículo automotor de titularidad del Sr. Cabrera.

IV. i) Deber de información.

Respecto al deber de información cabe decir que, tal como surge del art. 1100 del CCCN y art. 4 de la LDC, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. Este tiene tutela constitucional conforme el art. 42 de la CN, como superador de la autonomía de la voluntad de la codificación decimonónica que presupone a los contratantes como libres e iguales sin más referencia a las pautas del negocio que las remisiones al principio de buena fe (Arias Cau, “*La violación del derecho de información como falta formal y sus consecuencias*”, Microjuris, MJ-DOC-4142-AR).

El derecho de acceder a una información adecuada y veraz se ha configurado como uno de los principales derechos de los consumidores, sobre todo en un contexto que ha puesto en crisis la idea misma de la acción racional de los individuos al momento de tomar decisiones. El mismo genera el deber del proveedor u oferente de bienes y/o servicios de poner en conocimiento una cantidad de datos suficientes para restablecer o fortalecer el equilibrio entre las partes, el cual resulta un requisito esencial de la autonomía de voluntad. Así, tal como ha sido compartido por Müller, “la información debe tener aptitud para colocar al otro contratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado del negocio. La información debe cubrir la etapa genética y funcional, ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y reciprocidad. El deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, la autenticidad y la comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y la cual la otra – claramente más débil en la relación jurídica - carece” (SCBA, AC B 65834 del 07/03/2007, “Defensa de Usuario y Consumidores Asoc. Civil c. Org. Regulador de Aguas Bonaerenses y Aguas del Gran Buenos Aires”; citado en Müller, G. E., “Círculos de Ahorro Previo...”, La Ley, 2025, p. 189).

En este sentido, la información reviste el carácter de derecho esencial de todo consumidor o usuario, toda vez que los mismos presentan en toda relación de consumo una vulnerabilidad cognoscitiva, que precisamente pretende ser superada a través del deber de información impuesto al proveedor de bienes y servicios. La información al consumidor tiene que cumplir con determinados requisitos: (a) no sólo debe ser verdadera, sino también debe ser cierta, es decir, no generar incertidumbre; (b) debe ser clara, es decir inteligible o fácil de comprender; y (c) detallada, con la descripción minuciosa y circunstanciada de las características de los bienes o servicios y del contrato en sí (Chamatropulos, D. “*Estatuto del Consumidor*”, 2da. Ed., Buenos Aires: La Ley, 2019, T. I, p. 325).

Ante lo expuesto, la suerte de la pretensión del actor estará ligada a la respuesta que pueda obtenerse de analizar si la conducta desplegada por las demandadas supera el umbral de exigencia establecido por el deber de información.

Como punto de partida resulta adecuado tener presente lo resuelto en el trámite “Defensor Del Pueblo De Tucumán Vs. Volkswagen S.A. De Ahorro Para Fines Determinados Y Otros S/ Sumarísimo (Residual)” (expte. N° 2702/19). Esto debido a que los efectos de la medida cautelar dictada en el mismo alcanzaron al plan de ahorro en observación, aplicando los diferimientos allí ordenados desde el 08/01/2020 e interfiriendo bruscamente en la vida contractual de los interesados.

En dicho proceso, el 04/09/2019 se resolvió: “HACER LUGAR PARCIALMENTE a la medida cautelar solicitada por la parte actora. En consecuencia, previa caución juratoria ordenar que: 1) VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 2) F.C.A. S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 3) PLAN OVALO DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 4) PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 5) CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 6) INTERPLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 7) TOYOTA PLAN ARGENTINA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 8) AUTOPLAN DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, y 9) CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, realicen una suspensión de pago del 20%, de las alícuotas devengadas desde la fecha de demanda, únicamente a los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro con domicilio real en la jurisdicción del Centro Judicial Capital, de la Provincia de Tucumán, conforme a los parámetros establecidos en la resolución nro. 2/2019 de la Inspección General de Justicia de la Nación, con la excepción que la

postergación de pago y demás ítems establecidos en la misma, tendrán vigencia durante la tramitación de este proceso, absteniéndose asimismo los accionados de iniciar proceso legal alguno dentro del plazo estipulado, y de cobrar intereses de cualquier tipo. Por otro lado, el incremento de la alícuota no podrá superar anualmente el índice de inflación acumulada, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Oportunamente, disponer la publicación de la parte resolutive en un diario de mayor difusión de la provincia”.

Posteriormente, por sentencia del 14/11/2019, la Sala III de la Excma. Cámara del Fuero dispuso: “HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en subsidio del recurso de revocatoria a fs. 139/140 por el letrado apoderado de la parte actora Sr. Defensor del Pueblo de Tucumán y en consecuencia DISPONER que la medida cautelar otorgada por sentencia del 04/09/19 de fs. 134/136 será de aplicación a partir del mes de abril de 2018 y que será aplicable a los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro con domicilio real en cualquier lugar de la provincia”.

A su vez, el 12/03/2021, en el marco del Incidente N° 2, la Sala III de la Excma. Cámara del Fuero resolvió: “I) HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 21/22), (...), y los recursos de apelación deducidos en subsidio de revocatoria por las codemandadas (...), en contra de las sentencias de fecha 04 de septiembre de 2019 y 14 de noviembre de 2019, y disponer el inmediato levantamiento de la medida cautelar apelada, declarando la falta de legitimación activa del Defensor del Pueblo de Tucumán y ordenando el correlativo rechazo de la acción entablada. II) DISPONER que el recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos por efecto de la medida cautelar ordenada en autos operará mediante el pago, a opción del consumidor, de hasta un máximo de veinticuatro (24) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán el carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota (alícuota más carga administrativa), de manera tal que en caso de ser necesario el número de cuotas aumentará correlativamente. III)... IV) ...”. Dicho pronunciamiento fue aclarado el 07/05/2021 por la misma Sala III, aduciendo que: “las sumas oportunamente diferidas por efecto de la cautelar no se encuentran en mora, por lo que no corresponde a su respecto la resolución del contrato por incumplimiento, el inicio de acciones judiciales de cobro y la información a las bases de datos de informaciones comerciales”.

Finalmente, por sentencia dictada el 14/06/2022, la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió: “I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 12/03/21 en mérito a lo considerado”. Lo que motivó el recurso que radicó dicho trámite en manos de la CSJN, pendiente de resolución a la fecha.

De este modo, la posición de la parte demandada, en cuanto a los saldos diferidos y adeudados, responde a lo resuelto en el marco de dicho proceso colectivo, y será exigible únicamente bajo las condiciones allí establecidas, sin habilitar por sí solo la negativa de cumplimiento contractual.

En línea con lo expuesto, del aviso acompañado por el actor (cupón de pago cuota N°77 del 10/08/23), surge claro el detalle del concepto de “cumplimiento medida cautelar”, con un monto asignado al efecto, y en su margen superior la siguiente aclaración “Este plan cuenta con saldos diferidos pendientes de liquidación conforme surge de la medida cautelar dictada en el caso DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMÁN”. A su vez, el resumen de estado de deuda (informativo), también acompañado por la parte actora, valorizado el 20/12/2023, da cuenta de un monto adeudado de \$5.221.091,43 en concepto de Cuotas Históricas impagas, actualización por pago fuera de término, diferimientos e impuesto Ley 25.431. Dichos rubros coinciden con el Estado de deuda acompañado por la demandada, actualizado al 25/04/25, por un monto de \$9.739.213,89. Además, tal como ha sido sostenido por la parte demandada, no surge elemento alguno que

acredite una comunicación o cuestionamiento de la parte actora respecto a la variación del precio de las cuotas que fueron paulatinamente pagadas con un monto inferior al correspondiente debido a la aplicación del diferimiento ordenado.

En esas condiciones, mal puede achacarse incumplimiento al deber de información por la parte demandada en cuanto la misma informó adecuadamente de la existencia de los diferimientos conforme surge de los cupones de pago, en los cuales se consignó la leyenda que indicaba la aplicación de la medida cautelar y el saldo que era diferido en cada cuota por dicho ítem. Asimismo, dicha información también surge de los resúmenes de estado de deuda, en donde se detalla lo efectivamente adeudado en cada rubro y del cual la actora también tuvo conocimiento y acceso oportunamente (actor acompaña informe del 20/12/2023).

Tampoco ha de perderse de vista que resultó de público y notorio lo resuelto en el caso llamado "defensor del pueblo", por lo que también acudiendo a la publicidad y notoriedad del hecho que se reputa como "no informado", el argumento de la parte actora carece de asidero jurídico.

En efecto, más allá de las discrepancias que el actor pudiera tener con la demandada sobre los cálculos y la cuantía de la deuda en concepto de diferimientos – lo que no es objeto del presente litigio - está claro que se encontraba debidamente informado sobre todos los detalles de la operatoria, siendo la información contenida no solo en los cupones de pago y en los canales de comunicación habilitados por la demanda, sino también por la información de dominio público, acciones que satisfacen mínimamente el estándar legal requerido por ser cierta, clara y encontrarse detallada de manera adecuada y entendible. Por tal motivo, corresponde el rechazo de la pretensión de incumplimiento del deber de información esgrimido por la parte actora.

Levantamiento de prenda registral y pago de indemnización por destrucción total del vehículo adjudicado.

Tal como ha sido detallado previamente, el accionante requiere el levantamiento de la prenda registral suscripta sobre el vehículo adjudicado y, como consecuencia de ello, el pago del monto por indemnización correspondiente a la liquidación de seguro por destrucción total del automotor. Puede observarse que el análisis de estas cuestiones está íntimamente relacionado, por lo que resulta adecuado su consideración en conjunto.

En el marco del contrato de plan de ahorro, la principal responsabilidad de la Administradora es entregar al suscriptor adjudicado el bien, para lo cual debe realizar las diligencias conducentes a la concreción del objeto principal y causa final del contrato, esto es, la obtención de un bien por el ahorrista. Así, se llama adjudicación al acto mensual llevado a cabo por la Administradora para adjudicar los bienes (en este caso, automotor). En principio, se adjudicarán dos por mes, uno por sorteo y otro por licitación, pero ello depende de la existencia de fondos suficientes del plan correspondiente. En este orden de ideas, previo a la eventual entrega del bien (ya sea por sorteo o licitación), se impone al adjudicatario una serie de exigencias, entre otras, la suscripción de un contrato de prenda con registro como garantía por el total de las cuotas a vencer (art. 7, G, condiciones generales de contratación).

Este particular requerimiento se fundamenta en que, una vez adjudicado el bien al ahorrista, se considera que el mismo ha recibido un crédito por la diferencia entre lo que ha pagado hasta ese momento y el precio del bien recibido, crédito que se reajustará en la forma indicada, es decir en la medida del incremento del precio del bien que es el valor móvil, para posibilitar de esa manera la continuidad de las adjudicaciones a los demás ahorristas no adjudicatarios (González Vila D., *“La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor”*, 2021, p. 32). Así, de la lectura del art. 7, Inc. G,

de las condiciones generales de contratación surge que, al entregar el bien automotor, el adjudicatario debe “cómo garantía real de devolución del préstamo en dinero otorgado por la administradora, con fondos del Grupo y en resguardo de la integridad patrimonial de dicho grupo, suscribir un contrato de prenda con registro, con aplicación de la ley vigente, en primer grado en favor de la Administradora o de quién ésta indique por el total de las cuotas comerciales a vencer al momento de la suscripción de la citada prenda, primas de seguro y el monto correspondiente por el eventual cambio de modelo prorrateado en las cuotas”.

Recordemos que es obligación de cada adherente abonar la cuota de integración convenida en forma periódica y mensual, lo cual es vital para el funcionamiento del sistema de ahorro previo, en cuanto el ahorrista consumidor se integra en un circuito económico que involucra otras partes distintas, también vinculadas contractualmente dentro de una operación económica global, formando una red contractual, todos vinculados por una finalidad económica común previamente establecida. De esta manera, el resguardo del funcionamiento del sistema recae sobre la Administradora, “quien es la responsable de la organización del círculo, de la admisión de los adherentes, del debido y completo funcionamiento del sistema y asume la responsabilidad frente al ahorrista que no vea satisfecha su expectativa (Farina, J.M., “*Contratos comerciales modernos*”, Astrea, 2009, p. 579).

En este contexto, la Res. 8/2015, en su artículo 13.2, prevé la contratación de un seguro sobre el bien adjudicado. El beneficiario de éste será el grupo, no el suscriptor (asegurado), siendo la gestión de su cobro a cargo de la firma Administradora, quien deberá observar la diligencia necesaria para percibirla dentro de los plazos legales y contractuales. En concordancia, la cláusula 16.2 de las condiciones generales de contratación acompañada exige la contratación de un seguro del bien adjudicado a fin de mantener la eficacia de la garantía prendaria. Así, el adjudicatario asegurará el bien prendado, con cobertura adecuada y razonable.

De esta manera, tal como se encuentra acreditado, el automotor adjudicado al Sr. Cabrera se encontraba asegurado bajo la póliza N°50/02/774826/000 al momento del siniestro ocurrido el 03/10/24 (Siniestro N°50/02/133610). De acuerdo con lo expuesto por las partes, particularmente por la firma Seguros Rivadavia, dicha póliza amparaba los riesgos por destrucción total del vehículo (Cláusula CG-DA 4.2). Ahora bien, la aseguradora manifiesta que en dicho instrumento se encuentra establecido que “en caso de siniestro por Daño Total, debe estarse entonces a lo establecido en dicha póliza, que expresamente dispone: “En razón que el Asegurador ha sido notificado de la constitución de prenda con registro a favor del acreedor indicado en el Frente de Póliza con relación a los bienes asegurados por la presente póliza, se deja establecido que con la conformidad del asegurado, al presente seguro queda sujeto a partir de la fecha establecida en el Frente de Póliza a las siguientes condiciones: I.- El Asegurado transfiere al acreedor indicado precedentemente sus derechos al cobro de la indemnización que corresponda en caso de siniestro que afecte a dichos bienes, en la medida del interés emergente de su crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley N° 17418” (Cláusula CA – CC 7.1 - Transferencia de derechos a acreedores prendarios). Agrega que, en dicha póliza, se encuentra individualizado FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados como el acreedor prendario del vehículo asegurado (lo que surge expreso en el título automotor y en la póliza acompañada).

De este modo, del material probatorio aportado puede verse que, luego de la denuncia del siniestro, la aseguradora dio curso a la liquidación de este y notificó oportunamente la suma a indemnizar a la parte actora, requiriéndole la presentación de la documentación necesaria a la que se encontraba supeditado el pago (CG – CO 3.1.). Esto concuerda con la documentación acompañada, en la cual consta la recepción y conformidad de la parte actora (firma del 05/01/24). En la misma oportunidad, se agregó un anexo que contiene el detalle de la documentación a presentar por el asegurado en casos de destrucción del vehículo asegurado, lo que también figura como recepcionado por el actor

(firma olografa). Particularmente, cobra relevancia lo siguiente: “En caso de existir un acreedor prendario, un certificado del mismo sobre el saldo de la deuda, o bien, un comprobante de su cancelación mediante formulario D2...”, ello a los fines efectuar la liquidación y abonar la indemnización de manera correcta, en las porciones que a cada uno le corresponde, es decir: al acreedor, si correspondiere, por la deuda pendiente, y el remanente a favor del asegurado, claro está, teniendo como límite de la prestación debida la suma asegurada.

Al respecto, se encuentra acreditado que el actor, luego de ser adjudicado por el procedimiento de licitación, retiró el vehículo el 17/08/2017. De este modo, tal como consta en la copia de título automotor acompañada, el 14/08/2017 se inscribió una prenda registral sobre el vehículo, figurando como acreedor prendario FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados. Cabe destacar que dicho registro fue reinscripto el 03/08/2022, manteniéndose vigente en la fecha de la presente resolución. A su vez, también está comprobado que el accionante registra una deuda en concepto de cuotas impagas históricas, actualización por pago fuera de término, diferimientos de pago por recupero cautelar e impuesto Ley 25.413. De este modo, la parte actora equivoca su camino al intentar cuestionar la validez y vigencia de la garantía con la que carga el vehículo adjudicado, en cuanto “El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de cinco años, contados desde que la prenda se ha inscripto, al final de cuyo plazo máximo la prenda caduca. Podrá, sin embargo, reinscribirse por igual término el contrato no cancelado, a solicitud de su legítimo tenedor, dirigida al encargado del registro antes de caducar la inscripción. Si durante la vigencia de ésta se promoviera ejecución judicial, el actor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por el indicado término, todas las veces que fuera necesario” (art. 23, Decreto – Ley N°15348/46).

En esta lógica, siendo la sociedad de ahorro quien se encuentra obligada a salvaguardar el interés crediticio de todo el grupo de ahorristas en su carácter de Administradora, e incluso la encargada de la gestión del cobro de la indemnización para el caso de siniestros, mal puede considerarse que, ante la existencia de una deuda acumulada por la parte actora, el rechazo al pedido de levantamiento de la prenda registral pueda configurarse como un caso de incumplimiento contractual. Acceder a la cancelación de prenda solicitada implicaría intervenir y desnaturalizar el sistema de ahorro en concreto y afectar directamente a todo el grupo de ahorristas que también forman parte del plan de ahorro Grupo 13393, Orden 119, al verse en riesgo sus correspondientes derechos a la obtención de un bien automotor o, en su caso, al eventual reintegro de haberes. Todo ello teniendo particularmente en cuenta que la prenda registral es la garantía real constituida precisamente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes del adjudicatario. A los fines de su cancelación/levantamiento, el actor deberá afrontar, oportunamente, el pago de los saldos diferidos conforme las condiciones fijadas por la sentencia dictada en el analizado proceso colectivo ya tratado, lo cual asegura una distribución equitativa de la carga económica y evita perjuicios desproporcionados.

En este sentido, manteniéndose el carácter de acreedor prendario de la Administradora FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, el cumplimiento de las obligaciones que surgen como consecuencia del trámite de liquidación por el siniestro denunciado deberá realizarse de acuerdo con las cláusulas expresamente estipuladas en la póliza de seguro del bien N°50/02/774826/000, dentro de las cuales surge con meridiana claridad que el asegurado transfiere al acreedor prendario sus derechos al cobro de la indemnización que corresponde en caso de siniestro que afecte a los bienes asegurados y que, sin el consentimiento expreso este, no podrá sustituirlo (CA - CC 7.1 - Transferencia de Derechos a Acreedores Prendarios).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso no se encuentra cuestionada la existencia, composición y legitimidad de las sumas adeudadas por la parte actora al plan de ahorro,

las cuales surgen detalladas en los estados de deudas acompañados, corresponde rechazar el pedido de levantamiento de prenda registral recaída sobre el vehículo de su titularidad marca Fiat Palio Attractive, dominio AB706CL, y, en consecuencia, la pretensión de pago de la indemnización por destrucción total del mencionado automotor, la cual deberá realizarse de acuerdo al trámite previsto en la póliza 50/774826.

VI) Que la parte actora reclama el resarcimiento por el daño moral sufrido, por lo que ha de observarse que el mismo se trata de un rubro de naturaleza resarcitoria que tiene por objeto el menoscabo o lesión de carácter espiritual padecido por el damnificado, siendo su naturaleza extrapatrimonial. Sobra decir que la calificación de responsabilidad analizado en el punto anterior de ningún modo obsta el reclamo concurrente de rubros resarcitorios, cuando correspondiere. Asimismo, y como ya se dijo, el vínculo de las partes está dado por una relación de consumo, por lo que es aplicable al caso todo el sistema protectorio que implica el derecho del consumidor.

En ese sentido, junto con un importante sector de la doctrina, debemos señalar que el consumidor no concurre al mercado con una posición especulativa ni con ánimo de lucro, con la postura de quien supone posible el incumplimiento, pero decide correr el riesgo. No se trata de un profesional; lo hace con la expectativa de satisfacer una necesidad, la mayoría de las veces impulsado por las prácticas de comercialización del proveedor y la confianza que generan. Por ello, en materia consumeril, estos padecimientos morales son tan comunes. Se comprende de ese modo que no solo se considere el incumplimiento en sí mismo, sino también la afectación de otros deberes accesorios que impone el microsistema, como supuestos de responsabilidad de atribución objetiva: la ausencia o defectos en la información (art. 4 LDC), el trato digno, las prácticas abusivas (art. 8 bis LDC), la vulneración de la legítima expectativa creada (art. 7, 8 y 19 LDC), la mala fe en la etapa previa a la celebración del contrato (art. 37 LDC) (Muler, G. E., *“Cuestiones de Derecho del Consumidor II”*, Bibliotex, 2018, p. 238 - 239).

En este orden de ideas, se ha dicho que el daño moral es, en términos generales, aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos, o sea de esos derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las ‘facultades’ o ‘presupuestos’ de la personalidad: la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o el derecho de privacidad (art. 1071 bis, CC), la libertad individual, la integridad física, etc., todo lo cual puede resumirse conceptualmente como la seguridad personal; y el honor, la honra, los sagrados afectos, etc., o sea, en una palabra, lo que se conoce como afecciones legítimas. En esta línea, cabe señalar que la orientación de aceptar la existencia de los daños en base a presunciones hominis, que operan en defecto de prueba directa, resulta ser la dominante (Gherzi, C. A., *“Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral”*, LLC 2013, p. 133, Cita Online: AR/DOC/1005/2013).

Ahora bien, corresponde destacar que, en un sistema jurídico como el nuestro, la relación de causalidad tiene una importancia de primer plano, no sólo como condición general de la responsabilidad, sino también para establecer la medida de esta responsabilidad, ya que —salvo excepciones muy limitadas— el responsable está obligado a resarcir los daños que tengan vinculación causal con su acto y no los demás. El problema jurídico de la conexión causal consiste en determinar, de conformidad con la ley, cuando o con qué criterio un resultado debe ser atribuido a una persona determinada. En este sentido, debe contestarse: hay conexión causal entre un acto y un resultado, cuando ese acto ha contribuido de hecho a producir un resultado —esto es, ha sido una de las condiciones sine qua non de él— y, además, debía normalmente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (Orgaz, Alfredo, *“El daño resarcible”*, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 1952, p. 89). Es que la causalidad, en tanto presupuesto del deber de responder,

requiere que se constatan en el caso elementos como la regularidad y la previsibilidad (art. 1726, CCCN).

En este sentido, se ha dicho que “siendo excepcional el daño moral en el ámbito de la responsabilidad contractual, al actor le corresponde acreditar la existencia de una lesión a los sentimientos, afecciones o de la tranquilidad anímica, que no puede confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos y los negocios” (CNCiv., Sala G, “Olivera, Gladis Graciela c. Transporte Sur Nor C.I.S.A. y otros s/daños y perjuicios”, 13/03/2013, RCyS 2013-VII, 89, AR/JUR/4279/2013). De manera que, la pretensión de reparación de un supuesto agravio moral por un incumplimiento obligacional debe ser apreciada y valorada con cierto rigor (CCCTuc., Sala II, “Spuches c. MEDEA”, Sentencia N° 493,26/10/2015).

Conforme a ello, al no existir una inobservancia de los deberes de información por las demandadas, por lo que no existe deber de responder, y sumado a que el actor no ha demostrado aquellos padecimientos que puedan fundar una indemnización por daño moral que excedan a los ordinarios y propios de una relación empresa – consumidor, no concurren los extremos necesarios para justificar la existencia de un daño moral indemnizable. Por lo tanto, corresponde rechazar la pretensión de daño extrapatrimonial.

VII) Que la parte accionante reclama la aplicación de daños punitivos por las conductas dolosas e ilegítimas desplegadas por las demandadas que fundamentaron el inicio del presente litigio.

Al respecto, corresponde destacar que, tal como ha sido legislada la multa civil en nuestro ordenamiento, nada impide que el consumidor accione solamente para pedir la aplicación del daño punitivo; precisamente porque de la lectura del dispositivo legal no surge que el legislador haya condicionado la procedencia de sanción civil a la existencia de un daño cuya reparación se reclama. No resulta necesario entonces un proceso de daños y perjuicios u otro diferente de carácter principal, en el que se esgrima la pretensión sancionatoria. Ello explica que la suma de dinero en concepto de daño punitivo que el proveedor responsable deba desembolsar en favor del consumidor, no se imponga para compensar un daño efectivamente sufrido (que puede no ser tal), sino como sanción por un proceder reprobado por el derecho. Bajo tales fundamentos, una posición contraria impondría esperar que la conducta reprochable se cobre una víctima para recién habilitar el reclamo de la pretensión sancionatoria y justificar la aplicación del correctivo que, además, disuada al proveedor de reiterar ese comportamiento disvalioso (CSJT, en “Asociación de Consumidores del NA vs. Sparpani”, Sent. 1190 del 25/07/2019; “Ávila vs. Telecom”, Sent. 1932 del 13/12/2017; y la doctrina allí citada de Molina Sandoval, Pizarro, Piedecosas, Álvarez Larrondo, entre otros).

Los daños punitivos se encuentran regulados por el art. 52 bis de la ley 24.240, en cuanto dispone que la aplicación de estos corresponderá: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les corresponden la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista".

La amplitud del texto transcrito ha llevado a la construcción de interpretaciones variadas, por lo que en la tarea de presentar un concepto que pueda ser relativamente aceptado por la comunidad jurídica se han propuesto miradas disímiles. En efecto, se ha sostenido que "los daños punitivos, tal como son legislados en el régimen de defensa de los consumidores, consisten en un adicional que

puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder. De esta forma, se aprecia su propósito sancionatorio" (Mosset Iturraspe, J. - Wajtraub, J., "*Ley de Defensa del Consumidor*", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 279). También se ha dicho que "los daños punitivos consisten en adicionar al dañador un 'plus' de condena pecuniaria sancionando su grave conducta, lo que repercutirá con efectos ejemplificadores con relación a terceros. Es decir, una condena que se impone al dañador con carácter esencialmente sancionatorio y disuasivo, autónomo de la indemnización, cuya cuantificación y destino debe resultar de la ley, respetando los principios de razonabilidad y legalidad, y que rige en caso de daños graves causados con culpa o dolo" (Galdós, J., "*Los daños punitivos...*", ob. cit.; Galdós, J., "*Daño moral colectivo. Daños punitivos y legitimación procesal activa*", RDD, 6-133; Galdós, J., "*La sanción pecuniaria disuasiva ambiental*", RDA, 31-86; Llamas Pombo, E. - Mayo, J. - Galdós, J., "*Daños punitivos. Diálogos de doctrina*", LA LEY, 2011-E, 1155).

De tal manera, la doctrina y la jurisprudencia han delimitado los márgenes del instituto del daño punitivo, determinando que su procedencia, además del mero incumplimiento, exige una conducta desaprensiva por parte del proveedor que implique un grave menoscabo a los derechos del consumidor y que la misma, en caso de ser constante en sus relaciones comerciales, tenga repercusiones sociales negativas. Así lo ha entendido la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala II, al sostener que "Desde el punto de vista objetivo, para la aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis no basta un simple daño, sino que debe tratarse de un daño -o su posibilidad- que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional exija una sanción ejemplar (...) Desde el punto de vista subjetivo, la conducta del proveedor debe ser dolosamente indignante, recalcitrante, desaprensiva o antisocial. Para la concepción dominante en el derecho angloamericano, no cualquier acto ilícito puede generar la aplicación de punitive damages, sino que se requiere una particular subjetividad en la conducta del dañador (outrageous conduct) que va más allá de la mera negligencia (Pizarro, R., "*Daño moral*", p. 529, Hammurabi, Buenos Aires, 2004).

De este modo, se ha dicho que los extremos que deben probarse para la procedencia de los daños punitivos, más allá del elemento objetivo del incumplimiento contractual, a saber: I. Intencionalidad en el daño, es decir, que el incumplimiento del derecho sea causado a sabiendas de que el producto o servicio ofrecido puede ocasionar un daño, y mediante el cual se asegura que descontando las indemnizaciones tendrá aún un beneficio que redundará en ganancia. II. Concurrencia de un elemento subjetivo agravado, como puede ser el dolo o la culpa grave. Así, la aplicación de los daños punitivos debe ser excepcional y de naturaleza restrictiva y que solo procede cuando el proveedor incumpla sus obligaciones con dolo, culpa grave, malicia, cuando el comportamiento importa un desprecio inadmisibles para el consumidor (Barrionuevo, F. E., "*Los daños punitivos y un problema de justificación...*", TR LALEY AR/DOC/513/2025, SJA 09/05/2025, 1, JA 2025-II). Esto coincide con lo sostenido por la Cámara Civil y Comercial de nuestra provincia al afirmar que "no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean aplicables los daños punitivos o multa civil por actos desaprensivos, sino que se requiere la concurrencia de un elemento objetivo y de otro subjetivo (CCCom. - Sala 2, "Dergham Sara Elizabeth Vs. Círculo de Inversores S.A. de Ahorro Para Fines Determinados S/Sumario (Residual)", Expte. N°351/21, 28/08/25)

En el caso, por un lado, desde el punto de vista objetivo no se advierte un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional exija una sanción ejemplar como la que la multa civil representa. Por otro, la conducta del proveedor no se presenta como dolosa o gravemente culposa, ni indignante, recalcitrante o desaprensiva. El interés de la parte actora se encuentra debidamente satisfecho al haber sido informada suficientemente acerca de los diferimientos y las sumas adeudadas, tal como fue considerado. Tampoco el rechazo del pago de la indemnización por el siniestro configura un accionar contrario a derecho, como ya se explicitó en

párrafos anteriores.

Recordemos que la imposición de los daños punitivos o multa civil debe ser valorado restrictivamente en cuanto consiste en un ejercicio coactivo del derecho que impone sobre una determinada persona —humana o jurídica— la obligación de dar una suma de dinero por encima del daño efectivamente sufrido por la víctima y, como tal, “implica un límite al ámbito de libertad del sujeto pasivo de la sanción —en este caso el proveedor de bienes y servicios— consistente en el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asume frente al consumidor, ya que el mismo no debe apartarse de la conducta prometida o legalmente establecida” (Otaola, M., “*La justificación de los daños punitivos*”, Revista de la Facultad - UNC, 2014, p. 4)

Así las cosas, el rubro solicitado no puede prosperar, por no darse los presupuestos necesarios para su procedencia. En consecuencia, corresponde rechazar la aplicación de la multa civil prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

VIII) Que el principio de gratuidad con que los consumidores litigan hace que las costas no puedan - en principio - imponerse al actor que ha resultado vencido en el pleito. Sin embargo, seguir dogmáticamente tal principio habilitaría la jurisdicción para ser receptores de infundadas pretensiones jurídicas. Esto implica no perder de vista que frente a los intereses del consumidor se hallan también los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un razonable beneficio se lo convierte en un indebido privilegio (CSJN, LL, 1989 - B - 361, conf. CCom. . Sala 2, "Vallejo Nicolás Vs. PIAZZA S.A. s/Procesos de Consumo", Expte. N°1095/24, 31/07/2025).

En efecto, si bien es cierto que la actora no solicitó el diferimiento en el pago de las cuotas (porcentaje adeudado actualmente), no es menos cierto que la cautelar vigente alcanzó a todos los casos de la provincia en los cuales se involucre un contrato de ahorro previo automotor y, de este modo, el Sr. Cabrera se encontró -promediando la vigencia de su contrato- incluido en esas previsiones, tal como surge de la documental acompañada. De tal modo, la conducta desplegada por la firma administradora no puede considerarse como incumplidora del estándar que propopone el deber de información cuando la misma ha registrado dicha situación excepcional en los cupones de pago que fueron remitidos oportunamente con cada cuota como también se encontraba detallada en cada estado de deuda accesible al actor.

Sin embargo, debe recordarse que el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor y los arts. 481 y 487 del CPCCT establecen un régimen especial de gratuidad en favor de los consumidores, que desplaza la regla general del principio objetivo de la derrota (art. 61 CPCCT). La Corte Suprema de Justicia local ha sostenido reiteradamente que este beneficio es una prerrogativa reconocida al consumidor en razón de su condición de tal, no sujeta al resultado del pleito, y que solo puede restringirse en supuestos excepcionales de conducta abusiva, temeraria o maliciosa, lo que no se verifica en el presente caso. En esa línea ha manifestado que “el otorgamiento del beneficio no aparece condicionado por el resultado final del pleito, pues la norma lo prevé para todas las acciones iniciadas en defensa de intereses colectivos. Una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no sólo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue; sino, que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores -y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos”. (CSJT sentencia N° 609 de fecha 07/07/2021).

De este modo, teniendo en cuenta que el actor resultó vencido en la presente contienda, no concurren circunstancias excepcionales que puedan calificar su proceder como infundado ni carente

de razón probable en cuanto su pretensión refleja la volatilidad e incertidumbre en el marco de un acoplamiento de lógicas sistematicas disímiles como la jurídica, la económica y la administrativa que configuran un negocio jurídico sumamente complejo. De este modo, no surge que su accionar represente una conducta maliciosa ni que desnaturalice la gratuidad reconocida por la normativa consumeril, en cuanto la misma se ve sumamente afectada por la lógica que el propio negocio propone.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el 487 CPCCT., no configurándose el supuesto de excepción que contempla la norma, no corresponde imponer las costas a la actora como vencida; de allí que las costas por la actuación de la demandada, se imponen por el orden causado.

IX) Que, atento a que no se encuentra determinado el monto litigioso, es prudente diferir regulación de honorarios para su oportunidad.

Por ello,

RESUELVO:

I.- RECHAZAR la demanda promovida por el Sr. Miguel Antonio Cabrera, D.N.I. N°22.652.619, contra FCA S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-69223905-5, PIAZZA S.A., CUIT 30-69175275-1,y SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA, CUIT N°30500050310, conforme lo considerado.

II.- COSTAS, se imponen por el orden causado (art. 487, CPCCT), de acuerdo con lo considerado.

III.- RESERVAR, pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.^{FEB}

Dr. Daniel Lorenzo Iglesias

-Juez Civil y Comercial Común de la XVIa Nom.-

Actuación firmada en fecha 09/12/2025

Certificado digital:
CN=IGLESIAS Daniel Lorenzo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20253010593

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.